

El laberinto de dificultades del primer gobierno de izquierda en Colombia

Francisco José Reyes Torres

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Investigador y docente. Representante Legal de la Asociación Colombiana de Sociología.

El pasado 7 de agosto se cumplieron dos años del primer gobierno de izquierda en Colombia en cabeza de Gustavo Petro Urrego. Gobierno de gran significación histórica dado el asfixiante predominio que por más de 200 años (desde el inicio de la República) han mantenido los partidos y las expresiones políticas de las elites dominantes.

Las expectativas puestas en el Gobierno del Cambio, obviamente no tienen antecedentes en la historia política de Colombia. A nivel internacional llama la atención que la cuarta economía latinoamericana, un país que siempre fue percibido como un aliado incondicional de EE. UU. y bastión de una de las derechas más recalcitrantes del continente, pase a formar parte, desde 2022, de la segunda oleada de gobiernos progresistas en la región.

Colombia es un país de más de 55 millones de habitantes con una extraordinaria desigualdad social y económica que ha padecido una violencia política de manera casi ininterrumpida por más de 78 años, Pese a varios procesos de negociación política del conflicto armado, unos exitosos, otros fracasados y el último con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), imperfecto y precario, el conflicto armado se ha reciclado, prolongado y en no pocos casos, desnaturalizado de sus objetivos políticos iniciales.

El gobierno de Petro es de izquierda, pero de una izquierda que a duras penas se define como progresista ya que, como la mayoría de la izquierda en el mundo, ha renunciado desde hace años, a ser alternativa radical social y política al capitalismo. Este progresismo concentra su lucha contra las políticas más irritantes del neoliberalismo. El signo de los tiempos es tratar de volver a Keynes y obviamente nada o muy poco mirar a Marx.

Gustavo Petro se destaca dentro del conjunto de los líderes de la izquierda colombiana por su aguerrida trayectoria política, labrada a pulso. Es un dirigente estudioso con una notoria capacidad intelectual. Petro es un líder carismático con habilidad de despertar entusiasmo dada sus dotes oratorias, pero a su vez adolece de una incapacidad para administrar la gestión pública, escoger bien a sus colaboradores(as) y de armar y coordinar equipos de trabajo.

Petro, a diferencia de sus pares de la región, tiene un discurso más amplio sobre algunos problemas internacionales, particularmente los asociados a contrarrestar los efectos del cambio climático, llamando la atención sobre la urgencia de transformar la economía capitalista depredadora fundamentada en el extractivismo. Sin duda, es uno de los líderes latinoamericanos que con mayor claridad ha denunciado el genocidio de Israel en Palestina (Colombia es de los pocos países de la región que rompió relaciones diplomáticas con el estado sionista) y ha cuestionado el orden internacional belicista y depredador de las grandes potencias capitalistas.

La gobernabilidad de Petro es limitada por el hecho de no contar con una mayoría parlamentaria en las dos cámaras que conforman el Congreso de la República. Haciendo un esfuerzo Petro ha logrado conformar un heterogéneo bloque gobiernista conformado por la izquierda, sectores de centro e incluso algunas figuras del Partido Liberal, hasta obtener el apoyo del 32,41 % del Senado y el 35,64% de la Cámara de Representantes.

Para sacar adelante la agenda parlamentaria y las reformas mediante las leyes que le interesan al gobierno, Petro ha tenido que hacer acuerdos muy inestables con fuerzas tradicionales, que a menudo suelen vender su apoyo a cambio de prebendas y cargos burocráticos. De esta manera, el Gobierno del Cambio se ve obligado, en no pocos casos, a reproducir los peores vicios del sistema político colombiano.

Las reformas que propone el Gobierno del Cambio, que distan de ser radicales y muchos menos de corte socialista, son urgentes y necesarias, no obstante, las fuerzas parlamentarias del centro y la derecha se han opuesto a la mayoría de ellas con inusitado vigor. A esa oposición se le han sumado los principales gremios empresariales, buena parte de las altas cortes, la Fiscalía, la totalidad de los organismos de control y, casi por unanimidad, los grandes medios de comunicación.

Por una explicable simetría geométrica, propia de estos tiempos reaccionarios y de auge de la extrema derecha, en la misma medida que la mayoría de la izquierda latinoamericana se hace apenas progresista, el centro y la derecha se han corrido más a la derecha, hasta el punto que lo que era moneda corriente de las políticas cepalinas y de ciertas pretensiones del estado de bienestar en la región, otrora años sesenta y setenta, son percibidas ahora por el establecimiento, como medidas inadmisibles, colectivistas y “castrochavistas”. Prueba de ello es la tremenda resistencia que despierta en las elites cualquier atisbo de Reforma Agraria en la que se ha comprometido Petro, así sea con el alcance reducido del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.

En Colombia la Reforma Agraria es una pieza fundamental para lograr la paz política, para pagar una deuda histórica con el campesinado colombiano sin tierra y, junto al Ordenamiento Territorial y la actualización catastral, será un paso hacia la modernización democrática, desconcentrar la propiedad de la tierra y contrarrestar economías ilegales como los narcocultivos.

La Reforma a la Salud, la Reforma Laboral, la Reforma Educativa y la Reforma Política han naufragado en el Congreso o se encuentra en un difícil trance de aprobación. Es cierto que Petro ha logrado sacar, tras duras concesiones, algunas leyes, muchas de ellas de obvia gobernabilidad: leyes de presupuesto, la desdibujada Reforma Fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo. Recientemente logró conseguir la aprobación de una Reforma Pensional que, aunque no desmonta del todo el negocio de las aseguradoras privadas, amplió las posibilidades de subsidiar a las personas de la tercera edad de los niveles más precarios de la sociedad.

El Gobierno de Petro enfrenta su más fuerte desafío con su propuesta de Paz Total, la cual busca, mediante negociaciones políticas simultáneas pero separadas, el cese del conflicto armado con el ELN, con las disidencias de las antiguas FARC (el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia). También, con grupos de menor perfil político, mediante acuerdos para el sometimiento judicial a cambio de concesiones, es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en realidad grupo paramilitar conocido como el Clan del Golfo y con otras expresiones armadas de pura delincuencia común. Para ello se requiere un complejo diseño de negociaciones políticas con grupos muy diversos desde los que, pese a prácticas que rayan en la delincuencia común, todavía reclaman su condición de fuerzas insurgentes, hasta otros con conductas puramente criminales que, al controlar algunos territorios, se rehúsan al mero sometimiento judicial y aspiran a algún tratamiento político, por vago que sea.

La Paz Total de Petro, pese a la buena intención, adolece de un diseño precario, su implementación ha resultado muy errática. Con dificultad se han acordados algunos ceses al fuego entre algunos grupos y las fuerzas estatales, lo cual ha sido un alivio transitorio; pero por contraste, dichos grupos mantienen enfrentamientos entre sí y ejercen violencia contra sectores de la población civil llegando, en muchos casos, hasta el asesinato de líderes sociales cuando no se someten a sus dictados o los consideran simpatizantes de algún grupo contrario. Como es obvio, la oposición más recalcitrante de derecha, estridentemente, proclama que todo eso es el resultado de la complicidad y simpatía del gobierno con tales agrupaciones.

Otra frente de dificultades del Gobierno es la situación económica recesiva (reducción del consumo, inflación, aumento del desempleo y déficit fiscal) que obedece más situaciones estructurales internacionales postpandemia pero que el grueso del empresariado y los detentadores del gran capital lo atribuyen a Petro por tomar caóticas decisiones macroeconómicas, desincentivar la inversión extranjera y amenazar al gran capital.

Como resultado de algunas alianzas políticas de gobernabilidad con algunas figuras impresentables del establecimiento (caso Benendetti¹) y también por el actuar de figuras provenientes de la izquierda en el Gobierno, se han dado situaciones de evidente corrupción y manejo inescrupuloso de recursos públicos (caso UNGDR²). Aunque Petro ha exigido investigación y sanciones, todos estos hechos le hacen perder parte de la confianza de la opinión pública.

La situación es compleja, se requiere que en los dos años que restan del gobierno, los hechos y las ejecutorias hablen por sí solos. Es necesario garantizar la continuidad del proceso de cambio para que en el 2026 no vuelvan la derecha o el centro a revertir las reformas que se hayan logrado en el país. La base social alcanzada no es suficiente y no hay una figura de la izquierda que se acerque al prestigio que tiene Petro y sea una probable opción presidencial.

Colombia puede pagar el costo político de tener un líder carismático carente de equipo y de cuadros de recambio y, sobre todo, carente de serios partidos de izquierda más allá de ocasionales organizaciones verticales meramente electorales sin trabajo estructurado continuo en el campo popular y, de tener una izquierda incapaz de disputarle la hegemonía política y cultural a las elites tradicionales, ávidas de cobrar revancha. ■

-
- ¹ Armando Benedetti es un dirigente político que habiendo sido uribista y después santista, terminó entrando al Pacto Histórico, siendo pilar de la campaña de Petro en la Costa Atlántica. Es reconocido como un dirigente clientelista y corrupto. Amenazó a Petro con revelar la llegada de dineros turbios a su campaña, ha estado vinculado a escándalos en su vida privada. Actualmente es Embajador de Colombia ante la FAO.
 - ² Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que por su naturaleza tiene que hacer rápidas inversiones para afrontar catástrofes y riesgos, cosa que ha facilitado la corrupción en todos los gobiernos anteriores, pero en el caso del gobierno actual hay denuncias de contrataciones fraudulentas por más de 380. 000 millones de pesos.